



Bolivia no necesita elecciones sino consenso y derechos de propiedad

Stephen Johnson

Colaboraciones n° 458

5 de julio 2005

El enredador presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le echa la culpa a George W. Bush por el agitado conflicto en Bolivia. Dice que las manifestaciones que forzaron a Carlos Mesa el presidente boliviano, a renunciar el 6 de Junio fueron muestra del repudio popular de las políticas de democracia y libre mercado que Bush defiende. “Señor Peligro, su medicina ha fallado” acusó Chávez muy alegremente en un discurso radial el 12 de Junio en Venezuela.

Chávez recomendó su propia revolución como mejor alternativa. Él gobierna un estado del bienestar autocrático que supuestamente canaliza los beneficios de sus monopolios estatales hacia programas sociales para los pobres. Pero la receta de Chávez es el peor veneno. Concentrar el tesoro nacional en manos de

unos pocos es la típica receta latinoamericana para corrupción y ruina económica.

Lo que Bolivia necesita es una dosis de lo contrario: Compromiso y educación cívica para lograr que grupos sociales competidores trabajen juntos, leyes que saquen al gobierno del negocio de la energía y una nueva estructura legal para proteger los derechos de propiedad.

Dividir a fuego lento

Mucha de la confusión en Bolivia proviene de la discordia entre ciudadanos de descendencia europea y los indígenas pobres que son mayoría en el país (el 60%). Los descendientes de españoles por lo general han recibido concesiones territoriales y acceso al poder político gracias a gobiernos amigos mientras que los

nativos vivían alejados, mayormente sin educación y eran forzados a trabajar en las minas de plata y estaño así como en la agricultura de subsistencia.

Desde la independencia en 1825 hasta los años 1980, Bolivia sufrió frecuentes golpes de estado y constituciones de corta vida. Después de la revolución de 1952, se nacionalizó la industria minera y se redistribuyó la tierra de cultivo entre grupos indígenas. En 20 años el sector público se disparó y Bolivia acumuló tanta deuda que tuvo que recurrir a la economía del trueque.

De 1985 a 2000, líderes elegidos por el pueblo, un congreso más independiente, la privatización de industrias estatales como los hidrocarburos, impuestos más bajos y una apertura al comercio trajeron la estabilidad al país más un 4% de crecimiento económico anual como promedio.

Desafortunadamente, las enemistadas comunidades de Bolivia malgastaron ese momento para encontrar intereses comunes y fomentar una amplia participación en una economía libre.

El dolor del gas

En un segundo plano, la estrechamente centrada ayuda exterior americana había ayudado a Bolivia a eliminar alrededor del 90% de sus cultivos ilegales de coca. Pero los programas de sustitución de cultivos habían fallado en compensar por la pérdida de ingresos, causando una contracción en la economía. Al empezar el siglo, el presidente

Jorge Quiroga esperaba que la explotación de las reservas recién descubiertas de gas natural pudiese invertir el declive pero dejó el asunto a su sucesor.

Elegido en 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada trató de incrementar los ingresos del gobierno aumentando los impuestos y esto encolerizó a los votantes. Se sintieron más provocados aún cuando el presidente anunció sus planes para construir un gasoducto desde Bolivia al Océano Pacífico para exportar gas a Estados Unidos sin explicar cómo esas exportaciones podrían reanimar la economía y ayudar a los pobres.

Agitadores radicales aprovecharon la oportunidad. En Septiembre de 2003, amenazaron con palizas y vandalismo a los residentes de El Alto – una ciudad pobre que rodea la capital del altiplano La Paz – para bloquear los principales caminos en protesta por el gasoducto.

La violencia irrumpió cuando alborotadores dispararon contra tropas gubernamentales por tratar de rescatar turistas en manos de la turba que arrojaba piedras. Cuando los soldados respondieron a los disparos, los organizadores lo llamaron “masacre” y le echaron la culpa al gobierno.

El 17 de Octubre renunció Sánchez. Luego el comandante de las fuerzas armadas bolivianas informó que unos 70 rebeldes de las FARC de Colombia habían entrado en el país para participar en las protestas. En Colombia, este ejército marxista ha librado una guerra civil durante 40

años para derrocar al gobierno colombiano.

El reemplazo de Sánchez, el vicepresidente Carlos Mesa, siguió una agenda de apaciguamiento para comprar tiempo. Como resultado, los agitadores mantuvieron la ventaja, forzando al gobierno a aceptar la gradual nacionalización de las industrias petrolífera y gasífera, nuevas elecciones y una asamblea constituyente que escriba una nueva constitución para que beneficie especialmente a sus grupos.

En Marzo de 2005, Mesa ofreció su renuncia al congreso que la rechazó. En Mayo, se negó a firmar una ley que subía las regalías energéticas a las empresas extranjeras de un 18% a un 50% pero sin su veto formal se aprobó la ley. El 6 de Junio se fue para siempre.

Los legisladores nombraron al juez de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez para reemplazarlo. Ya que Rodríguez está fuera de la línea formal de sucesión, es de obligado cumplimiento tener nuevas elecciones.

Nosotros contra ellos

No obstante, las elecciones no evitarán que los dos grupos intransigentes vuelvan a enfrentarse. Por un lado están los líderes indígenas radicales como Jaime Solares de la Central Obrera Boliviana (COB) y Abel Mamani, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto. Alineados con ellos pero también compitiendo está el diputado Evo Morales,

presidente de la Federación de los productores de la hoja de coca en Cochabamba y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS).

Todos ellos quieren la nacionalización del petróleo y del gas y una nueva constitución para redistribuir la propiedad, la mayor parte de ella en remotas planicies lejos de donde vive la gente de sus distritos electorales.

Por el otro lado están los empresarios del Departamento de Santa Cruz. Preocupados con que se repita la revolución de 1952 y sus negativas consecuencias económicas, ellos buscan un gobierno autónomo y control efectivo sobre sus propios recursos. La mayor parte de los depósitos de hidrocarburos de Bolivia están allí en la zona. Ya que la constitución boliviana no protege la propiedad privada y los recursos del subsuelo pertenecen al estado, el control del gobierno es de vital importancia para ambos grupos.

Retorciendo la democracia

Después de 20 años de estabilidad y crecimiento económico, Bolivia parece estar saliéndose del buen camino y revirtiendo a golpes de estado, venganzas y populismo. Pero el antídoto para una guerra entre ricos y pobres es algo que ninguno de los dos lados ha intentado probar: Diálogo y consenso sobre el papel del gobierno y sobre los derechos de la propiedad privada.

Fuera del radio de influencia de los notorios activistas como Solares, Mamani y Morales, hay muchas

comunidades indígenas que dudan de las panaceas populistas. Los líderes empresariales deberían tratar de entenderse con esas comunidades para crear una coalición de intereses compartidos en acceso político, participación económica y derechos de propiedad privada más firmes para que todos puedan poseer terreno, sacar ventaja de los recursos del subsuelo en la zona y quedarse con su riqueza.

El congreso boliviano debería tomar en consideración revocar los draconianos impuestos energéticos para volver a conseguir inversión extranjera y luego hacer legalmente posible que los ciudadanos puedan sacar provecho de los recursos que hayan en su propiedad.

Estados Unidos y los gobiernos de otros países deberían alentar este

entendimiento con encauzada diplomacia pública y programas de educación cívica. Los inactivos programas de la National Endowment for Democracy (NEA) para dar formación política sobre la democracia a los partidos políticos deberían ser reactivados.

No hay tiempo que perder. A algunos en Sudamérica, como al presidente venezolano Hugo Chávez, les encantaría ver que Bolivia se convierte en un país con un gobierno militante y populista alineado con el de Venezuela. A los rebeldes de las FARC de Colombia les gustaría ver una dictadura marxista. Sin duda, la forma para lograr que eso suceda es alimentar la división social y poner los recursos energéticos en manos de unos pocos autoescogidos.

Stephen Johnson es analista político decano especializado en América Latina del "Centro Douglas and Sarah Allison para Política Exterior del Instituto Shelby Cullom Davis para Estudios Internacionales" de la Fundación Heritage.

©2005 The Heritage Foundation

©2005 Traducido por Miryam Lindberg

GEES agradece a la [Fundación Heritage](#) el permiso para publicar este artículo.